

ACTEAL, EL PRETEXTO PARA UNA ESTRATEGIA NUEVA DE OFENSIVA CONTRA EL EZLN: EL DESARME Y OTROS INTERLOCUTORES

**GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 5 ENERO DE 1998**

En la masacre a los refugiados de la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, donde 45 indígenas perdieron la vida, en su mayoría niños, niñas y mujeres de las cuales tres de ellas se encontraban embarazadas, se hizo evidente la escalada de violencia que se venía anunciando por parte de los grupos paramilitares. Hasta el momento, son 46 personas con auto de formal prisión por los delitos de homicidio calificado, portación ilegal de armas de fuego y de uso exclusivo del ejército y asociación delictuosa.

Este acontecimiento que conmovió a la nación y a muchos países del mundo, cimbró nuevamente las conciencias y al gobierno del Presidente Zedillo. La caída del Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, el auto de formal prisión al expresidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, y 45 personas más, son tan solo algunos de los reclamos de diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, las presiones políticas de ahora que no lograron ayer solo han llevado a mencionar, hasta el momento, las líneas de investigación sobre otros grupos paramilitares en el estado, según confirma la Procuraduría General de la República (PGR), como son los casos de Los Chinchulines, Máscara Roja y Paz y Justicia, además del Secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla, y otros funcionarios que han sido mencionados reiteradamente por algunos medios de comunicación como los orquestadores y facilitadores de los grupos paramilitares en los últimos dos años, tales son los casos de Uriel Jarquin y Antonio Pérez Hernández, subsecretario y titular de la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas -SEAPI-, respectivamente. Todavía se esconde en las investigaciones el gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro, al que se le augura poco tiempo en la gubernatura mientras se tratan de contrarrestar las voces que exigen la anulación de los poderes en Chiapas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

La PGR informó también la existencia de 40 órdenes de aprehensión más sobre supuestos autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal así como de 150 testimonios recabados hasta el momento.

El costo político de este acontecimiento que le ha implicado a la administración del Presidente Zedillo, ha ido acompañado por una mala imagen del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la medida en que los inculcados, así como miembros de otros grupos paramilitares, son señalados como de afiliación priísta. La pérdida de consenso y credibilidad de la opinión pública ante el Presidente, el partido oficial, el papel del ejército y la procuración de justicia en el país, crece.

Al tiempo en que se suceden estos hechos, la presión de grupos priístas, grupos paramilitares y del mismo ejército se hacen patentes en diversas regiones del estado. De la toma de La Realidad por parte del ejército se suscitaron muchas versiones que van desde la Secretaría de Gobernación (SG) y la Secretaría de la Defensa Nacional

(SEDENA) negándolo, hasta la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y medios informativos confirmando los hechos.

Pasado dicho acontecimiento, periodistas y caravanas que fueron a verificar los hechos confirmaron que el ejército ocupó las inmediaciones de La Realidad por espacio de 17 horas para después retirarse en medio de hostigamientos e interrogatorios a algunos campesinos en las inmediaciones. Al mismo tiempo, el ejército tiene prácticamente sitiados y controlados los Aguascalientes de la Garrucha, Morelia, Palenque y Oventic, donde la mayoría de la población ha salido de sus comunidades. Por si fuera poco, la comunidad de Polhó, municipio de Chenalhó, donde se encuentran 6 mil 13 bases de apoyo zapatista refugiados, y en la comunidad de Xoyeb del mismo municipio, se encuentran del mismo modo rodeados por el ejército mexicano, entre otras comunidades y caminos con la participación de los 2 mil soldados que han llegado a Chenalhó, parte de los 5 mil efectivos que arribaron recientemente a Chiapas.

Sin embargo, la factura política que le ha costado al gobierno todos estos acontecimientos, se intentan cobrar por medio de fuertes ataques a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y sus obispos como contra el mismo EZLN.

De ahí, las reacciones que en los últimos días se han dado por parte del gobierno giran básicamente en dos ejes estratégicos de una nueva ofensiva:

1) Aprovechando la búsqueda de las armas homicidas de la matanza de Acteal, el ejército y la PGR se lanzan contra supuestos arsenales del EZLN, bajo los siguientes argumentos: a) que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos está por encima de la Ley de Pacificación, que protege al EZLN; b) que mientras haya armas en el estado continuará la violencia; c) que se deben desarmar a todos los grupos armados que hay en el estado sin distinción alguna y bajo el imperio de la ley. Sin embargo, pocas armas de han incautado en Chenalhó y ningún operativo se ha realizado contra los otros grupos paramilitares de los que se han denunciado reiteradamente los nombres de los responsables, comunidades, municipios y hasta tipos de armas que portan en la Zona Norte y otras regiones del estado.

2) Con la presencia de nuevos grupos paramilitares, los cuales negó su existencia rotundamente el gobernador chiapaneco Julio Cesar Ruiz Ferro, se tendría la oportunidad de restarle fuerza política y de principal interlocución al EZLN reconociendo las demandas de estos grupos armados, darles el mismo perfil que el EZLN y crear así muchos interlocutores que, en la medida en que tengan que negociar entre ellos, el gobierno pasa a ser de una de las “partes” de la negociación señalada como causante del levantamiento indígena con raíces estructurales, a “mediador”, “testigo” o “facilitador” de la solución de los “conflictos intracomunitarios”.

El gobierno firmó los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena en febrero de 1996, luego se retractó de ellos argumentando básicamente que la “autonomía” implicaría una “balcanización del país”, luego, en voz del Jefe de la Delegación Gubernamental para la Paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que en realidad no es una balcanización y que todas las demandas del EZLN son “institucionalizables”, posteriormente regresó al argumento de la balcanización para rematar con que los “municipios rebeldes” zapatistas son ilegales. La confusión de estos argumentos con la confusión que genera el discurso gubernamental de supuesta

voluntad de diálogo y de cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, mantienen el escepticismo sobre el avance de la paz en Chiapas en medio de una creciente militarización y agudización de la tensión social y política que vive el estado.

Chiapas ha pasado nuevamente a la agenda nacional como el punto medular de la política nacional. Independientemente de las hipótesis señaladas, lo cierto es que, en vez de desmilitarizar las regiones indígenas, de cumplir los Acuerdos de San Andrés, de desarmar a los grupos paramilitares, entre algunos de los reclamos más importantes, la tendencia es inversa.